

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO
EXPEDEINTE	76001-23-33-004-2016-01928-00
DEMANDANTE	VICTOR MANUEL TELLEZ <a href="mailto:vimmattezz@hotmail.com">vimmattezz@hotmail.com</a> , <a href="mailto:oficinatellez@gmail.com">oficinatellez@gmail.com</a> .
DEMANDADO	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN <a href="mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co">jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co</a> , <a href="mailto:blanca.orjuela@fiscalia.go.co">blanca.orjuela@fiscalia.go.co</a>
MAGISTRADA PONENTE	Dra. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
ASUNTO	CORRECCION ARITMETICA

Santiago de Cali, primero (1) de agosto de dos mil veinte (2020).

Encontrándose el presente asunto para emitir el auto que ordena seguir adelante la ejecución, se advirtió que el auto por medio del cual se libró mandamiento de pago, así como también el que ordenó las medidas cautelares, contienen un error aritmético que debe subsanarse en esta etapa procesal.

De igual manera, se encontró que hasta la fecha no se ha efectuado el embargo de los dineros depositados en las cuentas bancarias de la Fiscalía General de la Nación, con destino a este proceso.

**ANTECEDENTES:**

El señor VICTOR MANUEL TELLEZ, promueve demanda ejecutiva contra la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, con el fin de obtener el cumplimiento de la sentencia del 29 de enero de 2014, proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la sentencia del 22 de octubre de 2004, emitida por esta Corporación.

Las **PRETENSIONES** de la demanda ejecutiva son las siguientes:

*"...Se libre mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas de dinero:*

***"PRIMERA...Por valor de \$ 242.809.130,8 (correspondientes al 49% por ciento del total de la condena).***

***SEGUNDO: ...Los intereses moratorios debidos desde el 20 de febrero de 2014 hasta el pago efectivo de la obligación...***

***TERCERA: Por los costos y costas del proceso..."***

## **TRAMITE PROCESAL.**

En este caso, se libró mandamiento de pago contra la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, y a favor de **VÍCTOR MANUEL TELLEZ**, por la suma de **ciento cincuenta y siete millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos (\$ 157.364.583)**, por concepto de capital, equivalente al 49% del valor de la condena por perjuicios morales y materiales impuesta en la sentencia del 29 de enero de 2014, con los correspondientes intereses moratorios causados desde el 21 de febrero de 2014 hasta que se verifique el pago efectivo y total de la obligación, de conformidad con el artículo 177 del C.C.A. (fls. 104 C.1).

De igual manera, mediante auto del 28 de enero de 2019 se ordenó el embargo y retención de los depósitos bancarios de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, limitándose la medida a la suma de **doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y un pesos (\$ 259.651.561)**, como cuantía máxima de la medida, conforme lo señalado en el numeral 10 del artículo 593 del CGP.

Surtida la respectiva notificación del mandamiento ejecutivo a la parte ejecutada presentó "contestación de la demanda", manifestando que se oponía a la prosperidad de las pretensiones de la misma, en razón a que el demandante presentó inicialmente ante la administración, la solicitud de pago de la condena impuesta a la Fiscalía y, por tanto debía respetar el turno asignado para el pago de la obligación, pues de lo contrario se desconocería el derecho a la igualdad y al debido proceso de las demás personas que reclaman el pago de indemnizaciones.

## **PARA RESOLVER SE CONSIDERA**

Sobre la corrección de errores aritméticos, el artículo 286 del C.G.P, establece:

***"... Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.***

*Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.*

*Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella.*

En el sub lite, conforme se advirtió previamente, el mandamiento de pago se libró por la suma de ciento cincuenta y siete millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos (\$ 157.364.583), equivalente al 49% del valor total de la condena impuesta en la sentencia del 29 de enero de 2014.

Para efectos de liquidar dicha suma de dinero se tuvo en cuenta los siguiente:

-. Que, mediante sentencia del 29 de enero de 2014, emitida por el Consejo de Estado, se declaró administrativamente responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la libertad del señor Carlos Julio Serna Noreña y en consecuencia se ordenó la siguiente indemnización en su favor:

*"...2. Condenase a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al demandante Carlos Julio Serna Noreña, el monto equivalente en pesos a **100 SMLMV**, a título de perjuicios morales.*

*3. Condenase a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al demandante Carlos Julio Serna Noreña, el monto equivalente en pesos a **20 SMLMV**, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.*

*5 (sic). Condenase a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al demandante Carlos Julio Serna Noreña, la suma de **\$ 234.912.211,2** (doscientos treinta y cuatro millones novecientos doce mil doscientos once pesos y dos centavos) a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.*

*6. Deniéguense las demás pretensiones*

*7. Sin condena en costas*

*8. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo..."* (negrillas fuera del texto, fls. 20-68 C.1).

-. Que entre los señores VICTOR MANUEL TELLEZ y CARLOS JULIO SERNA, se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales el 26 de noviembre de 1999 (fl. 101-102 C. 2), cuyo objeto fue la representación judicial por parte del primero, en el proceso judicial adelantado contra la Fiscalía General de La Nación, por la privación injusta del señor Carlos Julio Serna. Los contratantes pactaron como honorarios profesionales el equivalente al 49% que por cualquier suma se lograre dentro del proceso contencioso administrativo.

- Que el día 17 de marzo de 2014, el señor VICTOR MANUEL TELLEZ radicó cuenta de cobro para el pago de la sentencia del 29 de enero de 2014, ante la Fiscalía General de la Nación exigiendo el pago del equivalente al 49% de la Condena.

- Que el señor CARLOS JULIO SERNA NOREÑA, allegó memorial solicitando que el equivalente al 49% de la condena impuesta en la sentencia 29 de enero de 2014, fuera entregado al señor VICTOR MANUEL TELLEZ, en atención al contrato de prestación de servicios por ellos suscrito y al oficio del 30 de abril de 2015, emitido por la Fiscalía General de la Nación.

- Que el valor a ejecutar en favor del señor VICTOR MANUEL TELLEZ, corresponde al 49% del valor total de la condena por perjuicios materiales y morales impuesta en la sentencia del 29 de enero de 2014, emitida por el Consejo de Estado en segunda instancia, es decir a la sumatoria de; 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales, 20 SMLMV, por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y al valor de \$ 234.912.211,2 en la modalidad de lucro cesante-

En ese orden de ideas, al revisar nuevamente la liquidación practicada se encuentra que el valor total de la condena contenida en la sentencia de 29 de enero de 2020, corresponde a la suma de \$ 308.832.211<sup>1</sup>. De manera que al aplicarse el 49% sobre dicho valor, arroja un resultado de \$ 151. 327.783, el cual corresponde al capital a ejecutar en favor del señor VITOR MANUEL TELLEZ, y no el de \$ 157.364.583,39, consignado inicialmente en el mandamiento de pago.

Por lo expuesto, se corregirá el artículo 1º del auto del 28 de enero de 2019, por medio del cual se libró mandamiento de pago, el cual quedará de la siguiente manera:

***"ARTICULO PRIMERO: LÍBRESE MANDAMIENTO DE PAGO contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a favor de VÍCTOR MANUEL TELLEZ, por la suma de ciento cincuenta y un millones trecientos veintisiete mil setecientos ochenta y tres pesos (\$ 151. 327.783), por concepto de capital, equivalente al 49% del valor de la condena impuesta en la sentencia del 29 de enero de 2014, con los correspondientes intereses moratorios causados desde el 21 de febrero de 2014 hasta que se verifique el pago efectivo y total de la obligación, de conformidad con el artículo 177 del C.C.A".***

---

<sup>1</sup> Para determinar el valor total de la condena, se debe tomar el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2014 fijado en la suma de 616.000, como quiera que la sentencia de segunda instancia emitida por el Consejo de Estado, data del 29 de enero de 2014.

Por tanto, al efectuar el cálculo de la indemnización por concepto de perjuicios morales (100 SMLMV) y materiales en la modalidad de daño emergente (20 SMLMV), se obtienen los valores de \$ 61.600.000 y \$ 12.320.00 respectivamente, los que sumados a la indemnización por lucro cesante, correspondiente a la suma de \$ 234.912.211,2, generan el resultado de \$ 308.832.211,1, al cual se le aplica el porcentaje del 49%, obteniéndose un capital a ejecutar por \$ 151. 327.783.

Bajo dicho panorama, también debe corregirse el valor de la medida cautelar de embargo y retención ordenada en el presente proceso, como quiera que, al modificarse el capital a ejecutar, el monto de la medida varía.

Así entonces, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 593 del C.G.P, se corrige el límite del embargo en la suma de 249.690.841,45<sup>2</sup>, como cuantía máxima de la medida cautelar decretada.

Por lo expuesto, se corregirá el numeral segundo del auto del 28 de enero de 2019, mediante el cual se decretó una medida cautelar de embargo y retención, el cual quedará de la siguiente manera:

***"SEGUNDO: LIMÍTESE*** el embargo antes decretado a la suma de doscientos cuarenta y nueve millones, seiscientos noventa mil ochocientos cuarenta y un pesos (\$ 249.690.841) como cuantía máxima de la medida, conforme lo señalado en el numeral 10 del artículo 593 del CGP".

De otro lado, se observa que hasta la fecha no se ha efectuado el embargo de los dineros depositados en las cuentas bancarias de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la medida cautelar decretada, pues aunque algunas entidades bancarias registraron la medida, la misma no se ha hecho efectiva como en el caso del Banco BBVA<sup>3</sup>, mientras que otros bancos argumentaron que existen embargos anteriores <sup>4</sup>, o que los recursos gozan de inembargabilidad<sup>5</sup> y, otras informaron que la Fiscalía General de la Nación, no tenía ningún producto registrado con aquellas<sup>6</sup>.

Por lo tanto, se ordenará que por la Secretaría de la Corporación se oficie y remita a las entidades bancarias BANCO BBVA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCOLOMBIA y BANCO

---

<sup>2</sup> El cual comprende el valor total del crédito (\$ 151,327.738), el porcentaje del 50% aplicado a dicho valor (\$ 75.663.891) y el valor de las costas por concepto de agencias en derecho (\$ 22.699.160), equivalentes al 15% del valor ordenado en el mandamiento de pago, conforme lo establecido en el artículo 6º numeral 3.1.2. Parágrafo, del Acuerdo 1887 DE 2003 "Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho", expedido por la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que establece: "En los procesos ejecutivos, hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez".

<sup>3</sup> BBVA (FL. 41 C.1)

<sup>4</sup> BANCO DE BOGOTÁ (FL. 49 C.2), BANCOLOMBIA (FL. 50 C.2) DAVIVIENDA (FL 62 C.2) y BANCO

<sup>5</sup> BANCO POPULAR (FL 43 C.1), BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (FL. 54 C.2),

<sup>6</sup> BANCO CAJA SOCIAL (FL. 42 C.1), BANCO GNB SUDAMERIS (FL. 27 C.2), BANCO DE OCCIDENTE (FL. 28 C.2),

DAVIVIENDA, la presente providencia, para que adecuen el registro de la medida cautelar conforme a la corrección aritmética aquí efectuada.

De igual manera, se oficiará al BANCO POPULAR y al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, para que adopten la medida de embargo decretada por este Despacho, conforme fue ordenado en el auto de fecha 28 de enero de 2019, y de acuerdo a la corrección aritmética realizada en este auto.

Al respecto se aclara a las anteriores entidades bancarias, que el artículo 19<sup>7</sup> del Estatuto Orgánico del Presupuesto, fue declarado condicionalmente exequible mediante sentencia C-354-97 de 4 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell, bajo el entendido que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica dicho artículo y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar su ejecución, con embargo de recursos del presupuesto; en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos.

De dicha providencia se destaca:

*"... Para la Corte el principio de inembargabilidad general que consagra la norma resulta ajustado a la Constitución, por consultar su reiterada jurisprudencia. No obstante, es necesario hacer las siguientes precisiones:*

*a) La Corte entiende la norma acusada, con el alcance de que si bien la regla general es la inembargabilidad, ella **sufre excepciones cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias.***

*Por contener la norma una remisión tácita a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, igualmente entiende la Corte que los funcionarios*

---

<sup>7</sup> Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto...

ARTICULO 19. INEMBARGABILIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 60., 55, inciso 3o.).

*competentes deben adoptar las medidas que conduzcan al pago de dichas sentencias dentro de los plazos establecidos en las leyes...*

*Podría pensarse, que sólo los créditos cuyo título es una sentencia pueden ser pagados como lo indica la norma acusada, no así los demás títulos que constan en actos administrativos o que se originan en las operaciones contractuales de la administración. Sin embargo ello no es así, porque no existe una justificación objetiva y razonable para que únicamente se puedan satisfacer los títulos que constan en una sentencia y no los demás que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley.*

*Por lo tanto, es ineludible concluir que el procedimiento que debe seguirse para el pago de los créditos que constan en sentencias judiciales, es el mismo que debe adoptarse para el pago de los demás créditos a cargo del Estado, pues si ello no fuera así, se llegaría al absurdo de que para poder hacer efectivo un crédito que consta en un título válido emanado del propio Estado es necesario tramitar un proceso de conocimiento para que a través de una sentencia se declare la existencia de un crédito que, evidentemente, ya existe, con el pernicioso efecto del recargo innecesario de trabajo en la administración de justicia.*

*En conclusión, la Corte estima que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos...”.*

De igual manera, respecto a la inembargabilidad de los recursos públicos, en Sentencia C-566 de 2003, MP. Álvaro Tafur Galvis, al definir sobre la inconstitucionalidad del inciso primero (parcial) del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, la Corte Constitucional reiteró que el concepto de inembargabilidad de los recursos públicos no puede ser considerado como absoluto, existiendo en principio tres (3) excepciones a la regla, entre ellas, el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, tal como ocurre en el presente caso.<sup>8</sup>

Bajo el anterior panorama, la Corte explicó que si bien el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General

---

<sup>8</sup> Posición reiterada en la sentencia C-1154 de 2008, en la cual se abordó toda la línea jurisprudencial sobre los fundamentos constitucionales de la inembargabilidad, estableciéndose tres excepciones al mismo, así: i) La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, y iii) Los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

de la Nación; sin embargo, ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción<sup>9</sup>, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

De otro lado, también debe precisar el Despacho que la orden de embargo, no se encuentra dirigida a retener los recursos de que trata el artículo 195<sup>10</sup> del CPACA, la medida de embargo versa sobre los recursos cuya embargabilidad es procedente conforme a las excepciones y reglas previstas en las sentencias de constitucionalidad C-354 de 1997, C-566 de 2003 y C-1154 de 2008, anteriormente citadas.

Por lo anterior, el BANCO POPULAR y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, deben proceder con el registro del embargo decretado.

En consecuencia, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala Jurisdiccional de Decisión No. 4, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **R E S U E L V E:**

**Artículo Primero. - CORREGIR** el artículo 1º del auto del 28 de enero de 2019, por medio del cual se libró mandamiento de pago, por las razones expuestas en esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

***"... ARTICULO PRIMERO: LÍBRESE MANDAMIENTO DE PAGO contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a favor de VÍCTOR MANUEL TELLEZ, por la suma de ciento cincuenta y un millones trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y tres pesos (\$ 151. 327.783), por concepto de capital, equivalente al 49% del valor de la condena impuesta en la sentencia del 29 de enero de 2014, con los correspondientes intereses moratorios causados desde el 21 de febrero de 2014 hasta que se verifique el pago efectivo y total de la obligación, de conformidad con el artículo 177 del C.C.A.***

---

<sup>9</sup> "a) La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, b) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, y c) Los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible".

<sup>10</sup> **ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O CONCILIACIONES....**

PARÁGRAFO 2o. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria.



**Artículo Segundo. – CORREGIR** el numeral segundo del auto del 28 de enero de 2019, que decretó una medida cautelar, por lo expuesta en la parte motiva de este auto, el cual quedará de la siguiente manera:

***"SEGUNDO: LIMÍTESE*** el embargo antes decretado a la suma de ***doscientos cuarenta y nueve millones, seiscientos noventa mil setecientos sesenta y siete pesos (\$ 249.690.767)*** como cuantía máxima de la medida, conforme lo señalado en el numeral 10 del artículo 593 del CGP".

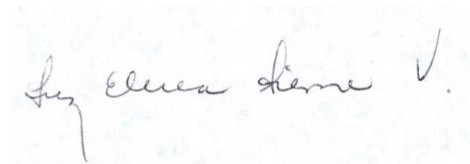
**Artículo tercero:** Por la Secretaría de la Corporación ofíciase y remítase a las entidades bancarias BANCO BBVA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCOLOMBIA y BANCO DAVIVIENDA, la presente providencia, para que adecuen el registro de la medida cautelar de embargo decretada mediante auto del 28 de enero de 2019, conforme a la corrección aritmética aquí efectuada, consignando las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales No. 760011001001 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, del Banco Agrario de Colombia, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación.

**Artículo cuarto:** OFICIAR al BANCO POPULAR y al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, para que adopten la medida de embargo decretada por este Despacho, conforme fue ordenado en el auto de fecha 28 de enero de 2019, y de acuerdo a la corrección aritmética realizada en este auto, consignando las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales No. 760011001001 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, del Banco Agrario de Colombia, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación.

**Artículo quinto:** Cumplidas las ordenes anteriores, vuelva el expediente al Despacho para continuar con el trámite pertinente.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

La magistrada,



**LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**